



BASES CONSTITUCIONALES
expedidas por el
Congreso Constituyente

1835



BASES CONSTITUCIONALES
*expedidas por el
Congreso Constituyente*

1835

BASES CONSTITUCIONALES
expedidas por el
Congreso Constituyente

1835



CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN

Bases constitucionales expedidas por el Congreso Constituyente

INTRODUCCIÓN

En la década de 1830 la lucha entre federalistas y centralistas generó tentativas separatistas de varios estados de la federación. También las conspiraciones monárquicas y las amenazas externas de intervención armada llevaron a cuestionar las bases del gobierno.

En 1834 el presidente Antonio López de Santa Anna convocó al Congreso para revisar la Constitución de 1824. Las crisis económicas, políticas y sociales propiciaron que los grupos centralistas se fortalecieran y propusieran terminar con el federalismo, pues lo consideraban un régimen débil. Así fue como aparecieron propuestas para modificar la carta constitucional a través de un congreso.

En mayo de 1834, una revuelta amparada en el *Plan de Cuernavaca* desconoció al congreso y se pronunció a favor de Antonio López de Santa Anna para encabezar un nuevo gobierno. Un Congreso Constitucional se reunió el 4 de enero de 1835 y desconoció al vicepresidente Valentín Gómez Farías como vicepresidente (entonces había un presidente interino, el Gral. Miguel Barragán).

Mientras tanto, el Congreso se asumió como Constituyente y aprobó el 23 de octubre de 1835 el proyecto de *Bases constitucionales* que suspendió la vigencia de la Constitución de 1824. Estas bases fueron el documento que dio origen a las llamadas “Siete Leyes Constitucionales” publicadas en diciembre de 1836 que establecieron una forma de gobierno centralista.

BASES CONSTITUCIONALES EXPEDIDAS POR EL CONGRESO CONSTITUYENTE

OCTUBRE 23, 1835

El presidente interino de la República Mexicana, a los habitantes de ella, sabed: Que el congreso general ha decretado lo siguiente:

Artículo 1.- La nación mexicana, una, soberana e independiente como hasta aquí, no profesa ni protege otra religión que la católica, apostólica, romana, ni tolera el ejercicio de otra alguna.

Artículo 2.- A todos los transeúntes, estantes y habitantes del Territorio mexicano, mientras respeten la religión y las leyes del país, la nación les guardará y hará guardar los derechos que legítimamente les correspondan: el derecho de gentes y el internacional designan cuáles son los de los extranjeros: una ley constitucional declarará los particulares al ciudadano mexicano.

Artículo 3.- El sistema gubernativo de la nación es el republicano, representativo popular.

Artículo 4.- El ejercicio del supremo poder nacional continuará dividido en legislativo, ejecutivo y judicial, que no podrán reunirse en ningún caso ni por ningún pretexto. Se establecerá además un arbitrio suficiente para que ninguno de los tres pueda traspasar los límites de sus atribuciones.

Artículo 5.- El ejercicio del poder legislativo residirá en un congreso de representantes de la nación, dividido en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, los que serán elegidos popular y periódicamente. La ley constitucional establecerá los requisitos que deben tener los electores y elegidos, el tiempo, modo y forma de las elecciones, la duración de los electos, y todo lo relativo a la organización esencial de estas dos partes del mencionado poder, y a la órbita de sus atribuciones.

Artículo 6.- El ejercicio del poder ejecutivo residirá en un presidente de elección popular indirecta y periódica, mexicano por nacimiento, cuyas

demás circunstancias, lo mismo que las de su elección, su duración, facultades y modo de ejercerlas, establecerá la ley constitucional.

Artículo 7.- El ejercicio del poder judicial residirá en una corte suprema de justicia, y en los tribunales y jueces que establecerá la ley constitucional: las cualidades de ellos, su número, radicación, responsabilidad y modo de elección, las prefijará dicha ley.

Artículo 8.- El territorio nacional se dividirá en Departamentos, sobre las bases de población, localidad, y demás circunstancias conducentes: su número, extensión y subdivisiones, detallará una ley constitucional.

Artículo 9.- Para el gobierno de los Departamentos habrá gobernadores y juntas departamentales: éstas serán elegidas popularmente, del modo y en el número que establecerá la ley, y aquéllos serán nombrados periódicamente por el supremo poder ejecutivo, a propuesta de dichas juntas.

Artículo 10.- El poder ejecutivo de los Departamentos residirá en el gobernador, con sujeción al ejecutivo supremo de la nación. Las juntas departamentales serán el consejo del gobernador, estarán encargadas de determinar o promover cuanto conduzca al bien y prosperidad de los Departamentos, y tendrán las facultades económico-municipales, electorales y legislativas que explicará la ley particular de su organización; siendo en cuanto al ejercicio de las de última clase, sujetas y responsables al congreso general de la nación.

Artículo 11.- Los funcionarios de dichos dos poderes en los Departamentos, y sus agentes inmediatos, serán precisamente ciudadanos mexicanos naturales o vecinos de los mismos Departamentos. La ley constitucional dirá las demás calidades y la intervención que han de tener el ejecutivo general y los gobernadores de los Departamentos en el nombramiento de los empleados en ellos.

Artículo 12.- El poder judicial se ejercerá en los Departamentos hasta la última instancia, por tribunales y jueces residentes en ellos, nombrados o confirmados por la alta corte de justicia de la nación, con intervención del supremo poder ejecutivo, de las juntas departamentales y de los tribunales

superiores, en los términos y con las responsabilidades que especificará la ley constitucional.

Artículo 13.- Las leyes y reglas para la administración de justicia en lo civil y criminal, serán las mismas en toda la nación, y lo serán igualmente las que establezcan contribuciones generales.

Artículo 14.- Una ley sistemará la hacienda pública en todos sus ramos: establecerá el método de cuenta y razón, organizará el tribunal de revisión de cuentas, y arreglará la jurisdicción económica y contenciosa en este ramo.

José Manuel Moreno, Presidente.- José R. Malo, Secretario.- Atenógenes Castellero, Secretario. Por tanto, mando se imprima, publique y se le dé el debido cumplimiento. Palacio del Gobierno nacional en México, a 23 de octubre de 1835.—Miguel Barragán.—A. D. Manuel Díez de Bonilla. Y lo comunico a usted para su inteligencia y fines consiguientes.

Dios y Libertad. México, octubre 23 de 1835.—Bonilla.

Diseño y traducción a epub

Maritza Moreno, www.paragraph.com.mx

Primera edición digital en EPUB: 2017

DR © Universidad Nacional Autónoma de México

Coordinación de Humanidades. Museo de las Constituciones

Calle del Carmen 31, Cuauhtémoc, Centro Histórico,

06000, Ciudad de México.

<http://www.museodelasconstituciones.unam.mx>

